



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GOBERNACIÓN

"El Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 637 -2019-GR-APURIMAC/GR.

Abancay; 10 OCT. 2019

VISTOS:

La Resolución N° 11 de fecha 12/09/2019, el Segundo Juzgado Civil de Abancay, remite copias certificadas de los partes judiciales, solicitados por el Gobierno Regional de Apurímac, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el mismo órgano jurisdiccional, en relación a lo pretendido por **Jorge David TORRES GONZALES**, y demás documentos que forman parte de la presente Resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes Nros. 27902 y 28013, se les reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución N° 11 de fecha 12/09/2019, el Segundo Juzgado Civil de Abancay, remite copias certificadas de los partes judiciales, solicitados por el Gobierno Regional de Apurímac, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el mismo órgano jurisdiccional, en relación a lo pretendido por **Jorge David TORRES GONZALES** a la Entidad demandada **GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC**;

Que, mediante Resolución N° 10 de fecha 12/08/2019, se Resuelve Declarar **CONSENTIDA** la resolución número ocho (Sentencia), su fecha cinco de junio del dos mil diecinueve en todos sus extremos, **REQUERIR** a la Entidad demandada del **GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC**, los extremos del fallo de la sentencia expedida en el presente proceso, en el plazo de quince días de notificado con la presente resolución, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento; con tal fin, notifíquese a las partes procesales con arreglo a ley e sus respectivos domicilio procesales y legal señalados en autos;

Que, el Juez del Segundo Juzgado Civil de Abancay, a través de la Resolución N° 08 (Sentencia) de fecha 05/06/2019, declara **FUNDADA EN PARTE** la demanda contenciosa administrativa que corre a fojas veinte a veintisiete, interpuesta por **Jorge David TORRES GONZALES**, en contra del Gobierno Regional de Apurímac y de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, con emplazamiento del Procurador Público del Gobierno Regional de Apurímac; en consecuencia **DECLARO: 1) La nulidad parcial** de la Resolución Gerencial General N° 382-2018-GR-APURIMAC/GG de fecha seis de Agosto del año 2018, en el extremo que se pronuncia sobre derechos laborales del accionante, vinculado a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, en base al 30% de su remuneración total de su remuneración total (total íntegra) y no en base a la remuneración total permanente, desde la fecha en que dicha bonificación es exigible para la demandante, es decir desde la vigencia de la Ley N° 25212, que modifica la Ley del Profesorado (21 de Mayo de 1990) hasta un día antes de la fecha del cese de la accionante, esto es, hasta el 30 de julio de 2004; con la sola deducción de lo que se le ha venido pagando por este concepto: en consecuencia, al demandante le corresponde el pago de los devengados antes señalados, más el pago de los intereses legales, dentro del plazo de veinte días hábiles de consentida o ejecutoriada esta sentencia, atendiendo a lo prescrito por el artículo 46.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 2) **Infundado** el pago de devengados a partir del cese de la demandante, esto es, a partir de treinta y





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GOBERNACIÓN

"El Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



637

uno de julio de dos mil cuatro: 3) **Improcedente** la demanda respecto de la nulidad parcial de la Resolución Directoral Regional N°0765-2018-DREA de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho (...);

Que, Resolución N° 08 (Sentencia) de fecha 05/06/2019 en el sexto considerando expone lo siguiente:

"Para el caso de autos, el principio de jerárquica normativa no es el único criterio que puede emplearse para dilucidar la mencionada divergencia (conflicto normativo) , pudiendo emplearse también el principio de especialidad, entendido como "*la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto genero sobre la norma reguladora de tal genero de una especie de cierto genero sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad*". Es decir, el principio de especialidad resultara debidamente aplicable cuando la norma especial sea la que mejor se adapte al supuesto de hecho planteado"

Que, la Dirección Regional de Educación Apurímac, en fecha 20/06/2018, emite la **Resolución Directoral Regional N° 0765-2018-DREA**, que declara Improcedente la solicitud de pago devengados o reintegros de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% en base a la remuneración total y no a la remuneración total permanente;

Que, el Gobierno Regional de Apurímac, mediante **Resolución Gerencial General Regional N° 382-2018-GR-APURIMAC/GG**, de fecha 06/08/2018, el Gobierno Regional de Apurímac, declara Infundado el pago de los devengados de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, en base al 30% en base a la remuneración total (total íntegra);

Que, respecto a la **Garantía de la cosa juzgada** el procesalista **Eduardo Couture**, en los fundamentos del Derecho Procesal Civil, Cuarta Edición, Euros Editores S.R.L. Argentina 2002, pp. 327 y ss.) señala que la **Cosa Juzgada** es el derecho logrado a través del proceso, la cual reúne los siguientes atributos: la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad. "La cosa juzgada es inimpugnable, en cuanto la ley impide todo ataque ulterior tendiente a obtener la revisión de la misma materia: **non bis in idem**. Si ese proceso se promoviera, pueda ser atendido en su comienzo con la invocación de la propia cosa juzgada esgrimida como excepción. También es inmutable o inmodificable (...) la inmodificabilidad de la sentencia consiste en que ningún caso de oficio o a petición de parte, otra autoridad podría alterar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada. La coercibilidad consiste en la eventualidad de ejecución forzada (...);

Que, en ese mismo sentido el Tribunal Constitucional ha considerado que mediante la garantía de la cosa juzgada se instituye el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no podrán ser recurridas mediante nuevos medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla, y en segundo lugar a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (**STC N° 4587-2004-AA, Fundamentos 36 al 45**);

Que, en efecto cuando se señala que un pronunciamiento adquiere la calidad de cosa juzgada, ello quiere decir que éste debe ser ejecutado en sus propios términos, y no puede ser dejado sin efecto, ser objeto de alteraciones o modificaciones posteriores por parte de los particulares, funcionarios públicos e incluso jueces encargados de su ejecución (**STC N° 02813-2007-PA/TC, Fundamento 8**);





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GOBERNACIÓN

"El Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



637

Que, conforme a lo dispuesto al D.S N° 004-2019-JUS de Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, a través de Artículo 215° - Irrevisabilidad de actos judicialmente confirmados, No serán en ningún caso revisables en sede administrativa los actos que hayan sido objeto de confirmación por sentencia judicial firme;

Que, conforme a lo consagrado en el Art. 139°, Inc. "22" de la Constitución Política del Perú¹, se establece que es principio de la función jurisdiccional la independencia en el ejercicio de la función, señalando que no se puede dejar sin efecto resoluciones que adquieren la calidad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución; concordante con lo previsto en el Art. 4° de La Ley Orgánica del Poder Judicial², que dispone la obligación de las personas y autoridades a acatar y cumplir las decisiones judiciales, de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni dejar sin efecto resoluciones Judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar, ni retardar su ejecución y contenido, bajo responsabilidad;

Por tanto, corresponde emitir el acto administrativo en cumplimiento de lo ordenado por el Segundo Juzgado Civil de Abancay, respecto al proceso contencioso administrativo seguido por la administrada antes mencionada, según los términos de la sentencia judicial; competencia que se asume en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del Art. 41.2 de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo -Ley N° 27584, que faculta al juez a identificar al órgano responsable dentro de la entidad que cumple el mandato;

Estando a la Opinión Legal N° 371 -2019-GRAP/08/ DRAJ, de fecha 27 de Setiembre del 2019;

Por las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones conferidas por el inciso a) y d)) del artículo 21° de la Ley N°27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorias, es atribución del Gobernador Regional, dirigida y supervisar la marcha del Gobierno Regional y sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos; y de dictar decretos y resoluciones la misma que establece que el Gobernador Regional es el Representante Legal y Titular del Pliego, la Credencial de fecha 26 de diciembre del 2018, otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, y la Ley N° 30305;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, la nulidad parcial de la Resolución Gerencial General Regional N° 382-2018-GR-APURIMAC/GG de fecha 06/08/2018, en el extremo que se refiere al demandante **Jorge David TORRES GONZALES**, quedando inalterable en relación a los demás administrados comprendidos en el acto administrativo.

Principios de la Administración de Justicia.

Artículo 139° - Constitución Política del Perú.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

Inc.2.- La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. "Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

² Ley Orgánica del Poder Judicial - Decreto Legislativo N° 767

Artículo 4°.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y a dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala.

Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GOBERNACIÓN

"El Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



637

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR FUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el administrado **Jorge David TORRES GONZALES**, contra la **Resolución Directoral Regional N° 0765-2018-DREA** de fecha 20/06/2018, en el extremo que se pronuncia sobre los derechos laborales que le corresponde al administrado vinculado a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación en base al 30% en base a su remuneración total (total íntegra), desde la fecha en que dicha bonificación es exigible para el demandante, desde la vigencia de la Ley N° 24029, modificado por la Ley N° 25212, con la sola deducción de lo que se le ha venido pagando por este concepto, previa liquidación administrativa, más los intereses legales, recaída en el **Expediente N° 01123-2018-0-0301-JR-CI-02**, sobre proceso contencioso administrativo tramitado ante el Segundo Juzgado Civil de Abancay.

ARTICULO TERCERO.- DEVOLVER, los actuados a la entidad de origen por corresponder para su conocimiento y cumplimiento, debiendo quedar copias del mismo en archivo como antecedente.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, con el presente acto administrativo, a la Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia General Regional, Dirección Regional Educación Apurímac, Procuraduría Pública Regional, Segundo Juzgado Civil de Abancay, informando sobre el cumplimiento de lo ordenado, al interesado, y demás sistemas administrativos que corresponda del Gobierno Regional de Apurímac, para su conocimiento y fines.

ARTICULO QUINTO.- REMITIR, copia de los actuados de la presente Resolución a la Oficina de Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurímac, para el deslinde responsabilidad administrativa de los sujetos procesales que no han interpuesto recurso impugnatorio de apelación contra la Resolución N° 08 de fecha 08/05/2019 Sentencia de primera instancia.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el portal electrónico del Gobierno Regional de Apurímac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



BALTÁZAR LANTARÓN NÚÑEZ
GOBERNADOR REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC.



BLN/GR/GRAP.
EMLL/DRAJ.
YCTA/BOG.

